



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

1133

P-1321/2007

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

Vistos para resolver los autos principales del juicio de
amparo número 1321/2007, promovido por

SOCIEDAD ANÓNIMA, contra actos de la **SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO y otras autoridades**, por violación a los
artículos 13, 14, 16, 17 y 22, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y,

RESULTANDO

PRIMERO.- Por escrito, presentado en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, el dieciocho de septiembre
de dos mil siete, y remitido el mismo día de su presentación, por
razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por conducto de su apoderado especial
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para
actos de dominio solicitó el amparo y
la protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y
por los actos que a continuación se señalan:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Se
señalan con ese carácter de autoridades
responsables ordenadoras y ejecutoras,
respectivamente, las siguientes:

1.- Tienen el carácter de **AUTORIDADES
RESPONSABLES ORDENADORAS:**

a) La **SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO**

FEDERAL (...)

2. Tienen el carácter de AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS:

a) La TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

b) El C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

c) El C. CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

d) El C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal (...)

e) La C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal (...)

f) El C. DIRECTOR DE LEGISLACION Y TRAMITES INMOBILIARIOS Adscrito a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal (...)

g) El C. SUBDIRECTOR DE TRAMITES INMOBILIARIOS adscrito a la Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios de la General Jurídica y de Estudios Legislativos, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.

h) El C. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVERSIONES Y PAGO DE INDEMNIZACIONES adscrito la Subdirección de Trámites Inmobiliarios de la Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal (...)

JUZGAL
DISTRITO EN MA
EN EL DIS

P-1321/2007¹¹³⁴

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

i) El C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL (...)

j) El C. TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

k) El C. PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (...)

l) El C. SUBTESORERO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, dependiente de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (...)

m) El C. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN "PARQUE LIRA", dependiente de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (...)



CUARTO DE
TERIA ADMINISTRATIVA
TRITO FEDERAL

n) El C. ACTUARIO Y EJECUTOR adscrito a la Administración Tributaria Local "PARQUE LIRA" asignado a la Sección Virreyes de las Lomas de Chapultepec adscrito a la Administración Tributaria Local en "Parque Lira" (...)

o) El C. SECRETARIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

p) El C. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (...)

q) El C. DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (...)

r) El C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (...)

s) El C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

97

RURAL dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (...)

t) El C. DIRECTOR DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS RECURSOS NATURALES de la Comisión Natural de Recursos Naturales y Desarrollo Rural dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (...)

u) El C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO (...)

v) El C. SUBDELEGADO BOSQUE DE CHAPULTEPEC perteneciente a la Delegación Política Miguel Hidalgo (...)

w) El C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL."

"IV. ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de las AUTORIDADES RESPONSABLES tanto ORDENADORAS como EJECUTORAS, esencialmente, el incumplimiento a la RESOLUCIÓN FIRME de treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, pronunciada por Unanimidad de Siete Votos de los C.C. Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los autos de los RECURSOS DE APELACIÓN 2405/2002 y 3586/2002 (ACUMULADOS), mediante la cual, se revocó la sentencia emitida por Unanimidad de Votos de los C.C. Magistrados que integran la Tercera Sala de ese mismo Tribunal en los autos del JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, y, donde, en la parte final del CONSIDERANDO XI, de la resolución en comento, expresamente se ordena: "restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de que quede firme el presente fallo" esto es, poner en posesión a

S.A., del predio ubicado en

esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1135

P-1321/2007

cada uno de los derechos que tenía con anterioridad a la expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o restricción alguna, de acuerdo con la antedicha resolución, lo cual, conforme a la misma, debía de haber sucedido a más tardar el pasado, catorce de julio de dos mil cinco, sin que hasta la fecha se haya verificado tal evento, por causas imputables directamente a las autoridades responsables, quienes, abusando de su autoridad, ilegalmente, lo han retenido y mantenido bajo el DOMINIO DE LOS BIENES PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL, sin título legítimo y sin contraprestación tal como si el referido predio continuase expropiado, haciendo caso omiso de la antedicha resolución y pasando por alto el fallo en comento, es decir, han confiscado ilegalmente dicho bien inmueble a

A., por lo que se conculca en su perjuicio lo establecido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, dejando a mi mandante en claro estado de indefensión. Incumplimiento y actos reclamados particulares derivados e indubitadamente relacionados con él, por parte de todas y cada una de las autoridades responsables, que se patentizan y reclaman de la siguiente manera:

a) De la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. El desentendimiento y desatendimiento del fiel cumplimiento de la RESOLUCIÓN FIRME de treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, pronunciada por Unanimidad de Siete Votos de los C.C. Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los autos de los RECURSOS DE APELACIÓN 2405/2002 y 3586/2002 (ACUMULADOS), mediante la cual, se revocó la sentencia emitida por Unanimidad de Votos de los C.C. Magistrados que integran la Tercera Sala de ese mismo Tribunal en los autos del JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, ordenado en la parte in fine, del CONSIDERANDO XI, de la resolución en comento: "restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de que quede firme el presente fallo"; ello dado que no se ha procurado la plena ejecución de la misma, es decir, que se ponga en posesión a

S.A. del predio sito en

Código Postal Delegación
en esta
Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en
que se hallaba y gozando de todos y cada uno de
los derechos que tenía con antelación a la
expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o
restricción alguna, por lo que se violan las garantías
individuales de mi mandante, como se expone en
esta demanda de amparo. Es menester resaltar que
dicho incumplimiento obedece, quizá al hecho de
que en la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal no se contemplan
medios coercitivos suficientes para llevar a cabo la
plena ejecución de las sentencias y resoluciones
que en ese órgano se pronuncian, o bien, tal vez, a
una mera omisión, desidia o ambas por parte de la
responsable, pero en cualquiera de los casos, es en
franco perjuicio y conculcación de las garantías
individuales de mi mandante,
S.A.

b) De la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL.- El desentendimiento y desatendimiento
del fiel y cabal cumplimiento de la RESOLUCIÓN
FIRME de treinta y uno de marzo del dos mil cuatro,
pronunciada por Unanimidad de Siete Votos de los
C.C. Magistrados que integran la Sala Superior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, en los autos de los RECURSOS DE
APELACIÓN 2405/2002 y 3586/2002
(ACUMULADOS), mediante la cual, se revocó la
sentencia emitida por Unanimidad de Votos de los
C.C. Magistrados que integran la Tercera Sala de
ese mismo Tribunal en los autos del JUICIO DE
NULIDAD III-11077/2000, habida cuenta de que,
aún y cuando por parte del suscrito, a nombre y en
representación de S.A., he
agotado ante la citada Tercera Sala, todos y cada
uno de los extremos contemplados por el artículo 83
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal vigente, tal como
obra en los autos del precitado JUICIO DE
NULIDAD III-11077/2000, interponiendo una queja
en contra de la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1136
P-1321/2007

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, pidiendo se le impongan a ésta las multas correspondientes por su falta de cumplimiento al citado fallo firme, y, solicitando se haga del conocimiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal tal situación, para que, como su superior jerárquico instruya y obligue a dicho servidor público, a dar el cumplimiento a la resolución precisada con antelación. Sin embargo, la autoridad responsable, no ha coaccionado debidamente tanto a la mencionada C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, como tampoco a su superior jerárquico, el C. JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, para que conjuntamente con las autoridades inherentes a la plena ejecución de la resolución: el C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, al C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, al C. SECRETARIO DE FINANZAS, al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, ni al C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, como titulares de sus respectivas dependencias, hagan la entrega a S.A., del predio situado en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que estaba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con anterioridad a la expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o restricción alguna, de acuerdo con el fallo precitado; cabe advertir, que dicho incumplimiento obedece, quizá al hecho de que en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no se contemplan medios coercitivos suficientes para llevar a cabo la plena ejecución de las sentencias y resoluciones que en ese órgano se pronuncian, o bien, tal vez, a una mera omisión, desidia o ambas por parte de la responsable, pero en cualquiera de los casos, es en franco perjuicio y conculcación de las garantías individuales de S.A.

c) Del C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- Como superior jerárquico de la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en primer lugar, el no haber obligado hasta la fecha al mencionado servidor público, a dar pleno y cabal cumplimiento a la RESOLUCIÓN FIRME que nos ocupa, aún y cuando, independientemente de mi petición ante la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, solicité su intervención para que la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS diera cumplimiento al multicitado fallo, también, mediante mi escrito de veintisiete de febrero de dos mil seis, que se acompaña, solicité su intervención para el efecto indicado, obteniendo como respuesta, solamente que se me remitiera con el C. CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, y de allí, con la propia C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, sin que se hiciera mayor énfasis en el problema que aqueja a mi mandante, tal como se precisa en el CAPITULO DE HECHOS de este recurso; en segundo lugar, asimismo, no ha procurado, darle el correcto seguimiento a la puesta en posesión a S.A. del predio ubicado en

Colonia

Delegación

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía antes de la expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o restricción alguna, de acuerdo con el referido fallo, vigilando, por consiguiente, se comunicara e instruyera a las autoridades inherentes a la plena ejecución de la resolución, para que, conjuntamente, el C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, el C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, el C. SECRETARIO DE FINANZAS, el C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL y el C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, como titulares de dichas dependencias, hubiesen ya llevado a cabo las acciones pertinentes, tendientes a concretar los alcances, consecuencias legales y obligaciones derivadas del cumplimiento de la

ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALLO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALLO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

P-1321/2007¹¹³⁷

resolución que nos ocupa; y, en tercer lugar, con su falta de coacción, ha encubierto, en franco perjuicio de S.A., el abuso de autoridad, el despojo, la ilegal confiscación y las demás violaciones que ha venido cometiendo la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, tras solapar el sabido hecho de que ésta desde el catorce de julio de dos mil cinco, a más tardar, debía de haber puesto en posesión de mi mandante, del referido predio, sin que hasta la fecha lo haya hecho, por lo que, con esos actos vulnera la esfera de garantías individuales de S.A., según se expone en este libelo.

d) Del C. CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Como inferior jerárquico inmediato del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero, superior jerárquico de la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, al igual que lo descrito en el inciso anterior, el incumplimiento a la multicitada RESOLUCIÓN FIRME, en el sentido de que no solamente no atendió las instrucciones de su superior jerárquico, el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de averiguar la causa por la cual, su inferior jerárquico no había, ni ha dado, cabal cumplimiento al fallo que nos ocupa, sino también, el que no coaccionó u obligó a la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS a cumplirlo, entregando a S.A., el predio situado en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con antelación a la expropiación a la cual se le sujetó, sin restricción o condición alguna, de acuerdo con el citado fallo. La responsable, simple, lisa y llanamente se limitó 'verbalmente' a 'remitirme' de nueva cuenta con la propia C. DIRECTOR

GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, sin hacer nada y sin tomar en cuenta la problemática planteada a través del ocurso a que se hace alusión en el inciso anterior, tal como se precisa en el CAPÍTULO DE HECHOS del presente escrito, por lo que, con esa actitud omisa, ha encubierto, en franco perjuicio de

S.A., el abuso de autoridad, el despojo, la ilegal confiscación y las demás violaciones que ha venido cometiendo la mencionada servidor público, en perjuicio de mi mandante, tras solapar el sabido hecho de que ésta desde el catorce de julio de dos mil cinco, a más tardar, debía de haberla puesto en posesión del referido predio, sin que hasta la fecha lo haya hecho, por lo que, con esos actos transgrede las garantías individuales de S.A.

e) Del C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.- Como inferior jerárquico del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, inferior jerárquico del C. Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, pero, como representante legal de la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, dentro del JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, el hecho de que nunca ha conminado, a la C. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, a dar pleno y cabal cumplimiento a la RESOLUCIÓN FIRME que se pronunció en los autos de los RECURSOS DE APELACIÓN 2405/2002 y 3586/2002 (ACUMULADOS), en contra de la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad, o bien, en su defecto, buscar la forma de cumplirlo a nombre y en representación de aquélla, pues como su 'representante legal', con esa omisión, ha encubierto, en franco perjuicio de

S.A., el abuso de autoridad, el despojo, la ilegal confiscación y las demás violaciones que ha venido cometiendo la mencionada servidor público, en perjuicio de mi mandante, tras solapar el sabido hecho de que ésta a más tardar el catorce de julio de dos mil cinco, debía de haber puesto en posesión a S.A., el predio ubicado en



P-1321/2007

Código Postal _____, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se hallaba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con antelación a la expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o restricción alguna, según la resolución que así lo ordenó, sin que hasta la fecha lo haya hecho. Actitud que evidencio desde el instante en el que tuve que ser el suscrito, quien, a nombre y en representación de

S.A., llevara a cabo las gestiones correspondientes para que la responsable se encargara de notificar a su representada, como se narra en el CAPITULO DE HECHOS de este ocurso, por lo que se estima, se han violado las garantías individuales de mi mandante.

- f) De la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.- La negativa a dar pleno y cabal cumplimiento a la ejecución de la RESOLUCION FIRME pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que aquí nos ocupa, y por consiguiente, la ilegal confiscación y retención sin causa justificada del predio ubicado en:

Delegación _____, Código Postal _____, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a INMOBILIARIA TREPI S.A. a pesar que el término al que se hace alusión en el fallo que indubitablemente la obliga a entregar el referido predio a mi mandante, feneció el catorce de julio de dos mil cinco, luego de que mediante un OFICIO (el que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que ni siquiera en copia simple obra en mi poder) recibido por conducto de la Oficialía de Partes de la oficina de la responsable a las 17:34 (DIECISIETE TREINTA Y CUATRO) horas, del día treinta de junio del dos mil cinco, bajo el FOLIO 20029 (VEINTE MIL VEINTINUEVE) fué notificada a instancias del suscrito, por la DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, de su obligación de poner a S.A., en posesión del predio sito en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con antelación a la expropiación a la cual se le sujetó, sin condición o restricción alguna, según la precitada resolución, debiendo, por ende, también haber hecho del conocimiento del C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, del C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, del C. SECRETARIO DE FINANZAS, del C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL y del C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, como titulares de dichas dependencias, el conocimiento del contenido y orden del precitado fallo, para que, conjuntamente, llevaran a cabo las acciones pertinentes, tendientes a concretar los alcances, consecuencias legales y obligaciones derivadas del cumplimiento de la resolución que nos ocupa, lo que hasta la fecha NO ha hecho, tal como se precisa en el CAPITULO DE HECHOS de esta demanda de amparo, ya que, en vez de hacerlo así, solamente les ha girado diversos oficios en los términos que se precisan más adelante. La autoridad responsable, no obstante su obligación, de ejecutar la resolución en comento, en los términos antes indicados, optó por hacer caso omiso de la misma, abusando de su autoridad, despojando y confiscando ilegalmente a , S.A., del predio antes

indicado, al negarse a poner hasta la fecha a mi mandante en posesión del mismo; simple, lisa y llanamente NO ha querido cumplir el fallo en perjuicio de

S.A., en un persistente, inefable e inexorable afán por retener el predio a cualquier costa, desafiando y desacatando una resolución firme, so pretexto, insulsamente de estar realizando "el dictamen respectivo" para su entrega, dizque recabando, según lo aduce, "los informes necesarios para cerciorarse de la factibilidad de restituir el predio a

S.A., siempre y cuando no existan elementos que demuestren que en ese lugar, se llevaron a cabo las acciones tendientes para determinar que se cumplió con la causa de utilidad pública por la que fué expropiado", lo cual, obviamente, en su momento procesal oportuno NO pudo demostrar y, todavía ahora, intenta hacer valer, fuera de juicio, siendo inconcuso que está condicionando la entrega a mi mandante del referido predio al con- tenido de los informes que solicitó, los cuales valorará y juzgará ella misma, haciendo caso omiso de la resolución que, conforme a derecho, debe acatar, motivo por el que se reputa, se han vulnerado las garantías



JUZGADO CUAR-
TITO EN MATERIA A
EN EL DISTRITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

P-1321/2007

1139

individuales de , S.A., tal como se sostiene en este ocurso.

- g) Del C. DIRECTOR DE LEGISLACION Y TRAMITES INMOBILIARIOS adscrito a la Dirección General Jurídico y de Estudios Legislativos dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.- Bajo el jaez (sic) de lo expuesto en el inciso que antecede, como inferior jerárquico de la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, ha incumplido la precitada RESOLUCION FIRME, en virtud de que, "según dice", acatando órdenes de su superior jerárquico inmediato, está recabando la "información necesaria" para la "elaboración de un dictamen" por instrucciones de la mencionada servidor público, para ver si resulta procedente la entrega" del predio sito en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a S.A., en lugar de haber elaborado ya el ACTA DE ENTREGA respectiva, en cumplimiento referido fallo, hollando así las garantías individuales de mi mandante. Lo anterior, se puede apreciar claramente en lo expuesto en el inciso u) que precede, donde se hace precisa el contenido de los oficios girados por esta autoridad responsable al C. DIRECTOR DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS RECURSOS NATURALES de la Comisión Natural de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

- h) El C. SUBDIRECTOR DE TRAMITES INMOBILIARIOS adscrito a la Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios de la General Jurídica y de Estudios Legislativos dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.- También como inferior jerárquico de la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, el incumplimiento a la RESOLUCIÓN FIRME, dado que, "según dice", acatando órdenes de su superior jerárquico, está recabando la "información necesaria" para la "elaboración de un dictamen" por instrucciones de la mencionada servidor público, "para ver si resulta procedente la entrega" del predio sito en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a S.A., en lugar de haber elaborado ya el ACTA DE ENTREGA respectiva, en cumplimiento al repetido fallo, quebrantando así las garantías individuales de mi mandante.

- i) El C. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVERSIONES Y PAGO DE INDEMNIZACIONES adscrito la Subdirección de Trámites Inmobiliarios dependiente Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios de la General Jurídica y de Estudios Legislativos dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.- Igualmente, como inferior jerárquico de la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, el incumplimiento de la RESOLUCION FIRME, puesto que, "según dice", acatando órdenes de su superior jerárquico, está recabando la "información necesaria" para la "elaboración de un dictamen" por instrucciones de la mencionada servidor público, "para ver si resulta procedente la entrega" del predio ubicado en

U, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a S.A., en vez de haber elaborado el ACTA DE ENTREGA respectiva, en cumplimiento a la cumplimiento al referido fallo, transgrediendo las garantías individuales de mi mandante.

- j) Del C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL.-El incumplimiento a la citada RESOLUCION FIRME pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal habida cuenta de que, la responsable pretende cobrar ilegal e indebidamente, a través de sus inferiores jerárquicos a S.A., el IMPUESTO PREDIAL respecto del predio sito en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, generado durante todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (en virtud de la expropiación a la cual estuvo sujeto), y hasta la fecha en que se ejecute la resolución (dado que el predio sigue



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1140

P-1321/2007

incorporado a los mismos ante el incumplimiento al fallo en comento). Lo anterior, en virtud de que, esta autoridad responsable, como superior jerárquico del C. TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, del C. PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, del C. SUBTESORERO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, del C. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN "PARQUE LIRA" y del C. ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL "PARQUE LIRA" ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, a través de ellos, como se dijo, ha dejado diversos requerimientos de pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL en el predio, pretendiendo el cobro de dicha contribución, según la responsable, generada durante todo el periodo en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal), lo cual, es nulo, indebido e ilegal desde su origen, toda vez que el propio Código Financiero del Distrito Federal contempla la exención del IMPUESTO PREDIAL respecto de los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL; bajo ese contexto, la autoridad responsable aquí señalada, en vez de ordenarse se expida según lo dispuesto por el artículo del 155 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal vigente, a favor de INMOBILIARIA TREPI, S.A., senda DECLARACION DE EXENCION DEL IMPUESTO PREDIAL, por el periodo comprendido desde el momento en que se expropió y hasta la fecha en que mi mandante sea puesta debidamente en posesión del predio precisado con antelación, conforme al fallo que no se ha acatado, para los efectos previstos por el cuarto párrafo del artículo 148 del Ordenamiento legal en cita, en estricto cumplimiento a la RESOLUCION FIRME antedicha, pretende el cobro ilegal e indebido del IMPUESTO PREDIAL indicado, en claro perjuicio y conculcación de las garantías individuales de mi mandante.

- k) Del C. TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- En el orden de ideas de lo expuesto en el inciso que antecede, de esta autoridad responsable, como inferior jerárquico del C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se reclama el

incumplimiento a la RESOLUCION FIRME precisada con antelación, toda vez que se pretende cobrar ilegal e indebidamente a S.A., el IMPUESTO PREDIAL respecto del predio ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, generado durante todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (en virtud de la expropiación a la cual estuvo sujeto), y hasta la fecha en que se ejecute la resolución (dado que el predio sigue incorporado a los mismos ante el incumplimiento al fallo en comento). Ello, toda vez que, por una parte, esta autoridad, al gozar de las facultades para hacer del conocimiento del C. PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, para que éste como responsable de emitir la DECLARACION DE EXENCION DEL IMPUESTO PREDIAL que se precisa en el inciso anterior, se ha abstenido de hacerlo; y, en segundo lugar, como superior jerárquico del C. SUBTESORERO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, del C. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN "PARQUE LIRA" y del C. ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL "PARQUE LIRA" ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, a través de éstos, ha dejado diversos requerimientos de pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL en el predio,

pretendiendo el cobro de dicha contribución, según la responsable, generada durante todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal), lo cual, es nulo, indebido e ilegal desde su origen, toda vez que, el propio Código Financiero del Distrito Federal vigente contempla la exención del IMPUESTO PREDIAL respecto de los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL; en ese orden de ideas, al omitir se ordene se giren las instrucciones al C. PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, para que expida conforme lo establecido por el artículo del 155 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal vigente, a favor de S.A., la DECLARACION DE



CITADO EN
DISTRITO EN MATERIA
EN EL DISTRITO



P-1321/2007 ¹¹⁴¹

EXENCION DEL IMPUESTO PREDIAL correspondiente por el período comprendido desde el momento en que se expropió y hasta la fecha en que mi mandante sea puesta debidamente en posesión del predio precisado con antelación, conforme al fallo que no se ha acatado, para los efectos previstos por el cuarto párrafo del artículo 148 del Ordenamiento legal en cita, en estricto cumplimiento a la RESOLUCION FIRME antedicha, pretende el cobro ilegal e indebido del IMPUESTO PREDIAL indicado, en perjuicio de S.A. y violando así sus garantías individuales.

- 1) Del C. PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.- En su carácter de inferior jerárquico del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el incumplimiento a la RESOLUCION FIRME mencionada con anterioridad, puesto que, como responsable directo de la expedición de la DECLARACION DE EXENCION del pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL respecto del predio sito en

Código Postal _____ en esta Ciudad de México, Distrito Federal, por todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal), dicha responsable se ha abstenido de expedir la referida declaración. En mérito de lo anterior, la responsable en apoyo a su superior, igual e inferiores jerárquicos pretende cobrar ilegal e indebidamente en perjuicio de S.A. el IMPUESTO PREDIAL precisado con antelación, pese a que dicho cobro es nulo, indebido e ilegal desde su origen, toda vez que el propio Código Financiero del Distrito Federal contempla la exención del IMPUESTO PREDIAL respectó de los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL; en esa inteligencia, es indiscutible el hecho de que, a efecto de no transgredir las garantías individuales de mi mandante, la autoridad responsable, con apego a lo dispuesto por el artículo del 155 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal vigente, debe expedir a favor de

S.A., la DECLARACION DE EXENCION DEL IMPUESTO PREDIAL por el período comprendido desde el

momento en que se expropió y hasta la fecha en que mi mandante sea puesta en posesión del predio precisado con antelación, para los efectos previstos por el cuarto párrafo del artículo 148 del Ordenamiento legal en cita, en estricto cumplimiento a la RESOLUCION FIRME que nos ocupa, pues, de lo contrario, se repite y reitera, está hollando las garantías individuales más elementales de mi mandante, S.A.

- m) Del C. SUBTESORERO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, adscrito a la Tesorería del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- El incumplimiento a la repetida RESOLUCIÓN FIRME, habida cuenta su pretensión de cobrar ilegal e indebida- mente a S.A., el IMPUESTO PREDIAL respecto del predio ubicado

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, generado durante todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (en virtud de la expropiación a la cual estuvo sujeto), y hasta la fecha en que se ejecute la resolución (dado que el predio sigue incorporado a los mismos ante el incumplimiento al fallo en comento). Esta autoridad responsable, como superior jerárquico del C. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN "PARQUE LIRA" y del C. ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL "PARQUE LIRA" ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, ha dejado por conducto de ellos diversos requerimientos de pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL en el predio, pretendiendo el cobro de dicha contribucion, díjase generada durante todo el período en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal), lo cual, es nulo indebido e ilegal desde su origen, toda vez que el propio Código Financiero del Distrito Federal vigente contempla la exención del IMPUESTO PREDIAL respecto de los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL; por lo



2007-03-01
10:41:05
Del Distrito



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

P-1321/2007¹¹⁴²

que, luego entonces, en estricto cumplimiento a la multicitada RESOLUCION FIRME, ese cobro y cualquier acto relacionado con él. evidentemente, violan las garantías individuales de S.A.

- n) Del C. ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN "PARQUE LIRA", dependiente de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal dependiente a su vez de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, como inferior jerárquico del C. Subtesorero de Administración Tributaria dependiente a su vez de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- El incumplimiento a la RESOLUCION FIRME en virtud de su pretensión de cobrar, legal e indebidamente a IN-MOBILIARIA TREPI, S.A. el IMPUESTO PREDIAL respecto del predio ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, generado durante todo el periodo en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (en virtud de la expropiación a la cual estuvo sujeto), y hasta la fecha en que se ejecute la resolución (dado que el predio sigue incorporado a los mismos ante el incumplimiento al fallo en comento). La responsable, como superior jerárquico del C. ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL "PARQUE LIRA" ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, por medio de éste, ha dejado diversos requerimientos de pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL en el predio, pretendiendo el cobro de dicha contribución, dizque generada durante todo el periodo en que el referido predio ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal), lo cual, es nulo, indebido e ilegal desde su origen, toda vez que el propio Código Financiero del Distrito Federal contempla la exención del IMPUESTO PREDIAL respecto de los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL; por consiguiente, en estricto cumplimiento a la multicitada RESOLUCION FIRME, ese cobro y/o cualquier otro acto

relacionado con él, transgreden las garantías individuales de S.A.

- o) Del C. ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL "PARQUE LIRA" ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, como inferior jerárquico del C. Administrador Tributario Local en "Parque Lira".- El incumplimiento a la ya referida RESOLUCION FIRME, puesto que, al "acatar ordenes de su superior jerárquico inmediato". esta autoridad responsable, ha requerido a S.A. efectúe el pago del IMPUESTO PREDIAL de la CUENTA CATASTRAL relativa al predio situado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, por el periodo que ha permanecido incorporado a los BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL (con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto y a la que hasta el día de hoy de una u otra manera sigue sujeto, en virtud del incumplimiento a la repetida resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por lo que, a querer o no, dicho predio continúa incorporado a los mencionados Bienes de Dominio Público del Distrito Federal); gestión de cobro ilegal e indebida, y nula desde su origen, ya que el propio Código Financiero del Distrito Federal contempla la exención de esa contribución respecto de dichos bienes, por lo que al efectuar actos tendientes a su cobro, lejos de dar cumplimiento al referido fallo, perjudican a mi mandante y la dejan en estado de indefensión violando las garantías individuales de S.A.

- p) Del C. SECRETARIO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- El incumplimiento al RESOLUCION FIRME pronunciada el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro por la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que nos ocupa, habida cuenta de que, en desacato a la misma, hasta la fecha no se ha modificado el REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y el PLANO ESCALA 1 a 10 000 respecto del predio sito en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal; como tampoco se ha



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

P-1321/2007¹¹⁴³

efectuado el cambio de clasificación del referido predio de AREA VERDE que se le asignó, al USO DE SUELO HABITACIONAL que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto, consecuentemente, al no habersele restituido sus derechos a dicho predio, se perjudica a

S.A., conculcándose sus garantías individuales. Empero, a mayor abundamiento, debe destacarse que esta transgresión se evidencia y hace crasa, cuando al otro predio que se menciona a fojas 7 (SIETE) y 8 (OCHO) de la sentencia, es decir, el ubicado en Montes Auvernia 745 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO), también en la

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, tanto ya le fue asignado el FOLIO REAL por parte del REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, como ya se le restituyó el uso de suelo habitacional con que contaba igualmente ese predio antes de la expropiación a la que asimismo estuvo sujeto, lo que consta en la inscripción de un asiento relativo a la restitución del uso de suelo habitacional visible en el precitado folio, el cual, le fue concedido, con la única restricción contemplada en ese entonces, en la Primera Sección del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete, que obra en las páginas 71 (SETENTA Y UNO) y 72 (SETENTA Y DOS), consistente en que los predios colindantes con que constituye el límite con el Bosque de Chapultepec (que es el caso del predio de Montes Apalaches que nos ocupa), dejaran 8 (OCHO) metros al frente para jardín. Luego entonces, al hacerse notoria esta violación de las garantías individuales en perjuicio de

S.A., es que, por obvias razones la responsable no ha expedido el CERTIFICADO DE USO DE SUELO respectivo, y, por ende, no ha hecho del conocimiento de el C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, del C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y del C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, las precitadas modificaciones para los efectos legales conducentes, todo ello, en contravención a la resolución que nos ocupa. Se exhiben copia certificada del Diario Oficial aludido, la que se acompaña junto con copia simple para su compulsu y devolución del original por no existir impedimento legal alguno para ello; además, de la Constancia de Folio Real con la que se acredita mi dicho, la que se adjunta en los mismos términos.

- q) Del C. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.- Como inferior jerárquico del C. Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, el incumplimiento a la antedicha RESOLUCION FIRME, mismo que se patentiza en el hecho de que, hasta la fecha, no ha efectuado las gestiones inherentes a la modificación al REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y el PLANO ESCALA 1 a 10,000 respecto del predio situado en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, como tampoco ha efectuado el cambio de clasificación del referido predio de AREA VERDE que se le asignó, al USO DE SUELO HABITACIONAL de que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto, en función de lo establecido en la Primera Sección del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete, visible a páginas 71 (SETENTA Y UNO) y 72 (SETENTA Y DOS), consistente en que los predios colindantes con que constituye el límite con el Bosque de Chapultepec (que es el caso del predio de Montes Apalaches que nos ocupa), dejasen 8 (OCHO) metros al frente para jardín, consiguientemente, al no haberse restituido los derechos de S.A., respecto del referido predio, la perjudica y conculca sus garantías individuales.



RICARDO CUA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
EN EL DISTRITO

- r) Del C. DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.- Como inferior jerárquico del C. Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y del C. Director General de Desarrollo Urbano de la dependencia antes señalada, el incumplimiento a la multicitada RESOLUCION FIRME, en el sentido de que hasta la fecha, no ha efectuado las gestiones inherentes a la modificación al REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y el PLANO ESCALA 1 a 10,000 respecto del predio ubicado en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal; como tampoco ha efectuado el cambio de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1144

P-1321/2007

clasificación del referido predio de AREA VERDE que se le asignó, al USO DE SUELO HABITACIONAL de que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto, en función de lo establecido en la Primera Sección del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete, visible a páginas 71 (SETENTA Y UNO) y 72 (SETENTA Y DOS), consistente en que los predios colindantes con

que constituye el límite con el Bosque de es (el caso; del predio de) que nos ocupa), dejasen 8 (OCHO) metros al frente para jardín, por lo que al no haberse restituido los derechos de S.A. respecto del referido predio, la perjudica y transgrede sus garantías individuales.

- s) Del C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. El incumplimiento a la RESOLUCION FIRME de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en comento, que obedece al hecho de que, la responsable, a través de sus inferiores jerárquicos, que se señalan en los incisos que preceden, fuera de juicio, y lejos de abstenerse de continuar enviando informes a la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en relación con el predio ubicado en

Código Postal

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, lo hace e insiste en aseverar que el mismo constituye un área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, sosteniendo la falacia, de que sí se cumplió con el objeto de la causa de utilidad pública contemplada por el artículo 2° del Decreto Expropiatorio que lo afectó, cuestión que, durante el JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, NO pudo demostrar, probar y/o acreditar cabal ni fehacientemente, tal como se precisa dentro del quinto y sexto párrafos del CONSIDERANDO XI de la propia resolución que aquí nos ocupa, de la siguiente manera: "Señala el actor en el número seis del capítulo de hechos que respecto de dichos informes que con estos no se precisa, funda y motiva la resolución impugnada ya que en ellos no se señala como se determino que se dio cabal cumplimiento a la causa de expropiación, y como determina que se realizó dentro del lapso que establece el artículo 9 de la Ley de Expropiación." "Lo anterior resulta fundado ya que de la lectura que se haga de la resolución impugnada no se desprende en que se basó la autoridad para señalar que se

había dado cabal cumplimiento al fin señalado en el decreto de expropiación, ya que si bien se señala la existencia de diversos informes los que no se encuentran sustentados en prueba idónea alguna para justificar la veracidad de los mismos como ya demostró y si bien también se indica una visita al inmueble de referencia, no se citan las circunstancias en que esta se realizó, y tampoco se precisa si al ser una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y Área natural protegida, como es que se realiza dicha protección, ya que únicamente se señala en dichos informes que se considera que se cumplió con el objetivo para el cual fue expropiado dicho predio porque esta completamente arbolado y libre de construcción, sin embargo del desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por el actor se demuestra lo contrario, ya que en esta se señala que el predio señalado con el número

se encuentra en total abandono con mucha basura y escombro de material de construcción, poblado de árboles y de maleza, con troncos secos, cercado con malla ciclónica y que se encuentra en una zona totalmente urbanizada, con banquetas pavimentadas alrededor del predio, además de servicios de luz eléctrica, y líneas telefónicas."(sic), de tal suerte que tal conducta y su complicidad e innegable apoyo a la mencionada servidor público, con el fin de que ésta elabore "el dictamen" al que se hizo referencia al señalar los actos que a ella se le reclaman, particularmente, el querer "cerciorarse de la factibilidad de restituir el predio a

S.A., siempre y cuando no existan elementos que demuestren que en ese lugar, se llevaron a cabo las acciones tendientes para determinar que se cumplió con la causa de utilidad pública por la que fue expropiado" vulneran las garantías de mi mandante, toda vez que existe una RESOLUCION FIRME que ordena que la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ponga en posesión S.A. del predio sito en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía antes de la expropiación a la cual se le sujetó, de acuerdo con el referido fallo, sin condición o restricción alguna.

- t) Del C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-55

P-1321/2007

1145

DEL DISTRITO FEDERAL.- Como inferior jerárquico del C. Secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, pero superior jerárquico del C. DIRECTOR DE CONSERVACION Y RESTAURACION, DE LOS RECURSOS NATURALES de la Comisión Natural de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.- El incumplimiento a la RESOLUCION FIRME antes señalada, toda vez, que como se precisó en el inciso anterior, bajo la supervisión de esta autoridad responsable, la que se precisa en el inciso que precede fuera de juicio, y lejos de abstenerse de continuar enviando informes a la C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en relación con el predio ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, lo hace e insiste en aseverar que el mismo constituye un área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, sosteniendo una mentira que si se cumplió con el objeto de la causa de utilidad pública contemplada por el artículo 2° del Decreto Expropiatorio que lo afectó, cuestión que, durante el JUICIO DE NULIDAD III 11077/2000, NO pudo demostrar, probar y/o acreditar cabal ni fehacientemente, tal como se precisa dentro del quinto y sexto párrafos del CONSIDERANDO XI de la propia sentencia que aquí nos ocupa, transcritos en el inciso anterior, desprendiéndose de esa conducta, su complicidad e innegable apoyo a la mencionada servidor público. Es menester resaltar, que dichos informes, han contribuido, de una u otra manera al "juego" de la citada C. DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, cuyo fin primordial es, como ya se especificó, NO poner en posesión S.A. del predio ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a como dé lugar, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía antes de la expropiación a la cual se le sujetó, de acuerdo con el multicitado fallo, violando sus garantías individuales.

- u) Del C. DIRECTOR DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS RECURSOS NATURALES de la

Comisión Natural de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.- Como inferior jerárquico del C. Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, el incumplimiento a la repetida RESOLUCION FIRME, en virtud de las razones expuestas en los incisos que anteceden, máxime que ha sido esta autoridad responsable quien verbalmente giró al Oficio

de fecha doce de diciembre de dos mil cinco, fuera de juicio a la C. DIREC- TOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, señalándole que si se cumplió con el objeto de la causa de utilidad pública contemplada por el artículo 2º del Decreto Expropiatorio que lo afectó al predio ubicado en

), Colonia
Delegación

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que el mismo constituye un área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, lo cual se repite y reitera, NO pudo demostrar, probar y/o acreditar cabal ni fehacientemente, durante el JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, tal como quedó plasmado en el quinto y sexto párrafos del CONSIDERANDO XI de la multicitada resolución. Oficio al que ahora se hace referencia en el diverso

de veintidós de junio de dos mil siete, dirigido por el C. DIRECTOR DE LEGISLACION Y TRAMITES INMOBILIARIOS adscrito a la DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, dirigido a la autoridad aquí señalada como responsable, a través del cual le vuelve a solicitar de nueva cuenta más informes sobre el particular que aquí nos ocupa, vulnerando, lamentable e innegablemente con ello las garantías individuales más elementales de

S.A. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no obra en mi poder el original de ninguno de los documentos mencionados, más que una copia simple del último de los oficios aquí precisados.

- v) Del C. JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO.- El incumplimiento a la RESOLUCION FIRME precisada con antelación, bajo el jaez (sic) de los actos reclamados al C. Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito



P-1321/2007 46

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Federal, al C. Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y al C. Director de Conservación y Restauración de los Recursos Naturales de la antedicha comisión, señalando como actos reclamados de esta autoridad, todas aquellas acciones que, fuera de juicio, "según dice" está realizando actualmente, so pretexto de conservar el predio sito en

Delegación

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, lo que durante el JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, NO pudo demostrar, probar y/o acreditar cabal ni fehacientemente tal como se precisa en el segundo párrafo. CONSIDERANDO XI: "Lo anterior resulta fundado, ya que del análisis de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil que obra a fojas 29 a 35 del expediente en que se actúa, se observa que en ella la autoridad se limita a señalar lo informado por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en el oficio número de fecha siete de julio de dos mil, en el que se indica que la administración del área donde se encuentra el predio cuya reversion pretende el actor corresponde a la Delegación Política en Miguel Hidalgo, por estar ubicado en suelo urbano, y que desde la declaratoria respectiva dicha Delegación, se ha hecho cargo de su vigilancia, administración, reforestación, manejo y uso público por lo que la Subdelegación Bosque de Chapultepec perteneciente a la Delegación Miguel Hidalgo le informó a la Dirección General que emitió el oficio de fecha siete de julio de dos mil, que esta realizando un programa de Recuperación Integral Chapultepec, nuestro Bosque, y luego enumera una serie de acciones que está llevando a cabo la citada subdelegación, pero no prueba por qué medios y en que fecha las autoridades que menciona de la Subdelegación Miguel Hidalgo informaron a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural acciones que dicen estar realizando a través del programa en cita, ni tampoco demuestra que efectivamente se están llevando a cabo dichas acciones por lo que no se demuestra que se está dando cumplimiento a los fines del decreto expropiatorio; también en la resolución impugnada se hace referencia al oficio le veintiséis de abril de dos mil emitido por la Dirección General de Administración Urbana en el que se indica que en sus

archivos se localizó el Decreto Presidencial de ocho de junio de mil novecientos noventa y dos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez del mismo mes y año, en el anexo uno por el que se expropió una superficie de 85-67-41.20 Hectáreas de terrenos correspondientes a la "Tercera Sección de Chapultepec y depresiones Aledañas en la Delegación Miguel Hidalgo", declarándose área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica quedando incluido totalmente entre otros predios el reclamado por la representación de

Sociedad Anónima, señalando que se realizó una visita al predio señalado y que este no ha sido alterado en su aspecto ecológico, ya que es un área densamente poblada por árboles por lo que considera que si se cumple la causa de utilidad pública para la que fue expropiado; sin embargo lo antes expresado es una afirmación genérica con la que bajo ningún concepto se demuestra que en el predio expropiado se cumpla la causa de utilidad pública por la que fue expropiado."(sic). Aunado a ello, dentro del ámbito de su competencia, el hecho de que hasta la fecha, no ha llevado a cabo la modificación al REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y el PLANO ESCALA 1 a 10,000 respecto del referido predio; como tampoco ha efectuado el cambio de clasificación del dicho predio de AREA VERDE que se le asignó, al USO DE SUELO HABITACIONAL de que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto, con que contaba igualmente ese predio antes de la expropiación a la que asimismo estuvo sujeto, concedido, con la única restricción contemplada en ese entonces, en la Primera Sección del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete, visible a páginas 71 (SETENTA Y UNO) y 72 (SETENTA Y DOS), consistente en que los predios colindantes con que constituye el límite con el Bosque de Chapultepec (que es el caso del predio de Montes Apalaches que nos ocupa), dejasen 8 (OCHO) metros al frente para jardín, por lo que, no se puede emitir la CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL adecuada, consecuentemente no se ha cumplido el fallo que nos ocupa. pues. no se han restituido los derechos de S.A., perjudicándola y conculcando sus garantías individuales.

- w) Del C. SUBDELEGADO BOSQUE DE CHAPULTEPEC perteneciente a la Delegación Política Miguel Hidalgo.- Como inferior jerárquico del C. Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, el incumplimiento a la RESOLUCION FIRME,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

1147

P-1321/2007

porque, fuera de juicio, "según asevera" está realizando actualente, so pretexto de conservar el predio situado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, lo que durante el JUICIO DE NULIDAD III-11077/2000, NO pudo demostrar, probar y/o acreditar cabal ni fehacientemente, según se señala en el segundo párrafo del CONSIDERANDO XI del fallo incumplido, transcrito en el inciso anterior, perjudicando a I, S.A., y, hollando sus garantías individuales.

- x) Del C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL. El incumplimiento a la ya referida RESOLUCION FIRME, que se hace patente en el hecho de que, la autoridad responsable, hasta la fecha no ha materializado, digitalizado, ni mucho menos asignado un FOLIO REAL al predio sito en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal; como tampoco, por consiguiente ha realizado la inscripción de sendos asientos relativos al uso del suelo habitacional que le corresponde, y los inherentes a la desincorporación de los BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, en perjuicio de mi mandante y desacatamiento del antedicho fallo, de ahí la razón por la que se conculcan las garantías individuales de S.A., mientras que al otro predio que se menciona a fojas 7 (SIETE) y 8 (OCHO) de la referida resolución, es decir, el ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal, ya le asigno el FOLIO REAL e hizo las diligencias e inscripciones de ley que le corresponden.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo primero y 114, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, con residencia en esta Ciudad de México, Distrito Federal; en relación con el párrafo segundo, fracción I del cuarto punto del Acuerdo General número 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; que entró en vigor a partir del cinco de septiembre de dos mil seis.

SEGUNDO.- Previa la determinación de certeza de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la **precisión** de los mismos, siendo estos los siguientes:

1.- El incumplimiento de la sentencia de treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los autos del recurso de apelación número 2405/2002 y su acumulado 3586/2002, en la que se ordena: "restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de que quede firme el presente fallo, dictando una nueva resolución siguiendo los lineamientos de este fallo" (fojas ciento cincuenta y tres a ciento sesenta y tres de autos).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1148

P-1321/2007

2.- La falta de requerimiento para que se de cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, a pesar de que se han agotado todos los extremos contemplados por el artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para tal efecto, incluso el de queja, tal como consta en los autos del juicio de nulidad 11077/2000.

3.- La omisión de atender las instrucciones giradas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para averiguar la causa por la cual no se ha cumplido aún la referida sentencia pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con fecha treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, en los autos del recurso de apelación número 2405/2002 y su acumulado 3586/2002.

4.- La abstención de expedir la declaración de exención del pago del impuesto predial relativo a la cuenta correspondiente al predio ubicado en

Delegación

Código Postal en esta Ciudad de México,

Distrito Federal, por todo el periodo comprendido desde el momento en que se expropió y hasta la fecha en que la quejosa sea puesta en posesión del mismo (fojas trescientas veintidós a trescientas veintiocho de autos).

5.- El requerimiento de pago del impuesto predial del inmueble antes mencionado, generado durante todo el periodo en que ha permanecido incorporado a los Bienes del Dominio Público del Distrito Federal, a virtud de la expropiación de la que fue objeto (fojas trescientas diez a trescientas veintidós de autos).

6.- La abstención de modificar el registro de los Planes y Programas del PROGRAMA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO y el PLANO ESCALA 1 a 10,000 respecto del predio antes descrito; y de efectuar el cambio de clasificación del referido predio de AREA VERDE que se le asignó, al de USO DE SUELO HABITACIONAL que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto; así como de expedir el certificado de uso de suelo respecto del aludido inmueble.

7.- El Oficio al que se hace referencia en el diverso de veintidós de junio de dos mil siete, suscrito por el DIRECTOR DE LEGISLACION Y TRAMITES INMOBILIARIOS adscrito a la DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, a través del que vuelve a solicitar más informes en relación con el predio localizado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal (fojas novecientas treinta y siete de autos).

8.- El oficio número de fecha siete de julio de dos mil, en el que el DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, informa al DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, que la administración del área donde se encuentra el predio cuya reversión pretende la actora, corresponde a la Delegación Política en Miguel Hidalgo, la que se ha hecho cargo de su vigilancia, administración, reforestación, manejo y uso público a través de la Subdelegación Bosque de Chapultepec, la cual esta realizando un programa de "Recuperación Integral Chapultepec, nuestro Bosque" (fojas seiscientas treinta y tres a seiscientas treinta y cuatro de autos).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-65

1149

P-1321/2007

9.- El Oficio de veintiséis de abril de dos mil, en el que se informa a la DIRECTORA DE LEGISLACIÓN Y TRAMITES INMOBILIARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, que en los archivos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA, se localizó el Decreto Presidencial de ocho de junio de mil novecientos noventa y dos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez del mismo mes y año, por el que se expropió una superficie de 85-67-41-20 hectáreas de terrenos correspondientes a la Tercera Sección de Chapultepec y depresiones Aledañas, en la Delegación Miguel Hidalgo, declarándose área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, quedando incluido entre otros predios, el reclamado (fojas ochocientas catorce a ochocientas diecisiete de autos).

10.- La omisión de digitalizar y asignar un FOLIO REAL al predio ubicado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal; y de realizar la inscripción de sendos asientos relativos al uso del suelo habitacional que le corresponde, y de los inherentes a la desincorporación de los BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, del citado predio, así como la omisión de expedir (la Constancia) de alineamiento y número oficial correspondiente (fojas doscientas setenta y nueve a trescientas nueve de autos).

Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado en la Jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en la página treinta y dos, del Tomo: XI,

Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo”.

Y la Jurisprudencia número: Tesis: XX.1o.J/44 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en la página quinientos diecinueve, del Tomo: VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.”

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad además con lo señalado en la jurisprudencia número



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1150

P-1321/2007

XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página sesenta y ocho, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro expresa: **"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."**

Al respecto **no son ciertos** los actos reclamados a la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL y a la SALA SUPERIOR del referido Tribunal; los cuales se hicieron consistir en el incumplimiento de la sentencia dictada por esta última autoridad el **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, al resolver el recurso de apelación número 2405/2002 y su acumulado 3586/2002, en la que se **revocó** la pronunciada por la autoridad primeramente citada, en el juicio de anulación número III-11077/2000 y **declaro la nulidad** de la resolución impugnada en la que se negó la reversión solicitada respecto del predio ubicado en:

toda vez que las indicadas autoridades al rendir el informe justificado que le fue solicitado, **niegan** la existencia de los actos en comento (fojas **trecientas noventa y siete y trescientas noventa y dos a trescientas noventa y tres de autos**).

De la misma manera **no son ciertos** los actos atribuidos al DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, nombre correcto de la autoridad designada por la quejosa como Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, consistentes dichos actos en el incumplimiento de la sentencia de **treinta y uno de marzo del dos mil cuatro**, por omitir digitalizar y asignar un folio real al predio identificado en el

párrafo que precede; así como realizar la inscripción de los asientos relativos al uso del suelo habitacional que según la quejosa le corresponde y los inherentes a la desincorporación de los Bienes del Dominio Publico del Distrito Federal.

Lo anterior, en virtud de que al rendir su correspondiente informe con justificación (fojas mil ciento ocho a mil ciento diez de autos), la citada autoridad señala que no recibió ninguna orden en tal sentido y en consecuencia **niega** los actos antes precisados.

Tampoco son ciertos los actos reclamados al DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL (nombre correcto de la designada por la quejosa como Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal), SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL y, DIRECTORA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (nombre correcto de de la autoridad designada por la quejosa como Subdelegado del Bosque de Chapultepec), que la peticionaria de garantías hace consistir en el incumplimiento de la resolución firme pronunciada, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contenciosa Administrativo del Distrito Federal, el **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, traducidos en el caso de las dos primeras autoridades, en su insistencia en informar y aseverar que el predio defendido por la quejosa constituye un área natural protegida y en que se cumplió con el objeto de la causa de utilidad pública contemplada por el artículo segundo del Decreto Expropiatorio que lo afecto; de la tercera, su abstención de obligar al Director General Jurídico a cumplir con la sentencia antes mencionada y dar seguimiento a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

P-1321/2007¹¹⁵¹

entrega del bien de que se trata a S.A.; y de la última autoridad, en la realización de actos tendientes a conservar el predio antes mencionado como área verde protegida.

Acontece así, porque al rendir su respectivo informe justificado las autoridades antes mencionadas, en oficios que obran a fojas quinientas once a quinientas diecisiete, quinientas sesenta a quinientas sesenta y uno, mil treinta y cuatro a mil treinta y cinco, y mil treinta y ocho a mil cuarenta de autos, respectivamente, **niegan la existencia** de los actos que se les atribuye.

Por su parte los CC DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, dependientes ambos de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, al rendir conjuntamente su informe justificado (fojas quinientas noventa y cinco a seiscientas cuatro de autos), **niegan la existencia** de los actos que de ellas se reclamen, consistentes en el incumplimiento de la resolución pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con fecha **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, al resolver el recurso de apelación número 2405/2002 y su acumulado 3586/2002; los que a decir de la quejosa se traducen en no efectuar las gestiones inherentes a la modificación al Registro de los Planes y Programas del Programa Delegacional en Miguel Hidalgo y el Plano Escala 1 a 10,000 respecto del predio situado en

Código Postal en esta Ciudad de México, Distrito Federal; y en no realizar el cambio de clasificación de dicho

predio de AREA VERDE que se le asignó, a USO DE SUELO HABITACIONAL de que gozaba antes de la expropiación a la que estuvo sujeto, en función de lo establecido en la páginas setenta y uno a setenta y dos de la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete (fojas doscientas treinta y cuatro a doscientas setenta y cuatro de autos), consistente en que los predios colindantes con _____ que es el caso del predio que nos ocupa, dejen ocho metros al frente para jardín.

Negativa esta que debe admitirse por no existir resolución alguna que obligue a las autoridades de que se trata, a proceder en la forma que señala la peticionaria de grantías.

✓ De igual manera, **no son ciertos** los actos atribuidos al DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, al SUBDIRECTOR DE TRÁMITES INMOBILIARIOS y, al JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVERSIONES Y PAGO DE INDEMINIZACIÓN, adscritos todos a la CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, consistentes tales actos en la negativa a dar cabal cumplimiento a la resolución pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con fecha **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, traducidos a decir de la quejosa en recabar información para elaborar un dictamen, en el que se determine si procede la entrega del predio localizado en

Delegación

Código Postal _____ de esta Ciudad Capital, en lugar de elaborar el acta de entrega del indicado bien en acatamiento del aludido fallo.



JUZGADO
DISTRITO EN MATERIA
EN EL DISTRITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

1152

P-1321/2007

Acontece así, porque al rendir conjuntamente su informe con justificación las autoridades antes mencionada, **niegan** la existencia de los actos precisados con antelación (fojas seiscientas siete a seiscientas veinticinco de autos).

No resultan ciertos los actos reclamados al SECRETARIO DESARROLLO/ URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, consistentes en la omisión de modificar el registro de los Planes y Programa Delegacional en Miguel Hidalgo y el Plano Escala 1 a 10,000 respecto del predio sito en



CUARTO DE
RIA ADMINISTRATIV
RITO FEDERAL

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, de efectuar el cambio de clasificación del referido predio de AREA VERDE al de USO DE SUELO HABITACIONAL, con la única restricción contemplada en las páginas setenta y uno a setenta y dos, de la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete, (fojas doscientas treinta y cuatro a doscientas setenta y cuatro de autos), consistente en que los predios colindantes con Circuito Joaquín Clausell, que caso del predio que nos ocupa, se deje ocho metros al frente para jardín; y de expedir el Certificado de Uso de Suelo respectivo.

Ello en virtud de que la citada autoridad al rendir el informe justificado que le fue solicitado (fojas quinientas ochenta y cinco a quinientas noventa y cinco de autos), **niega** la existencia de los aludidos actos, sin que la quejosa desvirtuara esa negativa, mediante la demostración de que existe alguna resolución o disposición legal que obligue a la indicada autoridad a la modificación del registro de los planes

a que se refiere al cambio de clasificación que señala; y, en expedir el certificado de uso de suelo a que alude.

✓ En el caso, **no son ciertos** los actos atribuidos a la JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO consistentes en la realización de acciones tendientes a la recuperación integral Chapultepec, nuestro Bosque y para conservar el predio sito en

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica; en la abstención de llevar a cabo la modificación al Registro de los Planes y Programas del Programa Delegacional en Miguel Hidalgo y Plano a Escala 1 a 10,000 respecto del referido predio; y en la abstención de efectuar el cambio de clasificación del dicho predio de AREA VERDE que se le asignó, al de USO DE SUELO HABITACIONAL.

Lo anterior, porque la citada JEFA DELEGACIONAL al rendir el informe justificado que se le solicitó (fojas quinientas ochenta y dos a quinientas ochenta y cuatro), **niega la existencia** de tales actos.

Sin que obste en contrario el hecho de que a fojas seiscientas treinta y cinco a seiscientas cuarenta y seis de autos, obre copia del Programa de Recuperación Integral, Chapultepec, Nuestro Bosque, porque de su análisis se advierte que en él no se alude expresamente al inmueble que defiende la quejosa y que lo opera la Subdelegación del Bosque de Chapultepec; y en cuanto al segundo y tercer actos, porque en los presentes autos no existe constancia alguna con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-65

P-1321/2007 ¹¹⁵³

la que se demuestre que se hubiere ordenado a la aludida responsable, modificar el Registro de los Planos y Programas del Programa Delegacional a que se refiere la quejosa y que efectuara el cambio de clasificación del predio que identifica en su demanda de garantías, de área verde asignado en el Decreto expropiatorio publicado el diez de junio de mil novecientos noventa y dos, al de uso habitacional que menciona.

Tampoco son ciertos los actos reclamados al DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (foja novecientas cincuenta y ocho de autos) y al CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (fojas mil treinta y seis a mil treinta y siete de autos), consistentes en el incumplimiento a la multicitada resolución firme de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, por no obligar al DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, a entregar a S.A. el predio situado en

Código Postal en

esta Ciudad Capital, sin condición alguna, en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con antelación a la expropiación de la cual fue objeto; toda vez que al rendir su respectivo informe justificado las autoridades de que se trata niegan dichos actos.

Negativa esta que también debe admitirse en atención a que en los autos relativos a este juicio y en los que integran los cuadernos de prueba relativos al mismo, no obra constancia

alguna con la que se acredite que la citadas autoridades están obligadas a proceder en la forma que señala la quejosa y menos a ponerla en posesión del predio que describe, pues no existe resolución legal que así lo determine.

Finalmente, **no son ciertos** los actos reclamados al SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (foja seiscientas cinco a seiscientas seis de autos), PROCURADOR FISCAL DE LA CITADA ENTIDAD (fojas novecientas cincuenta y nueve a novecientas sesenta de autos), TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (foja novecientas sesenta y uno a novecientas sesenta y dos de autos), SUBTESORERO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (foja novecientas sesenta y cuatro a novecientas sesenta y cinco de autos) y, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN PARQUE LIRA (foja mil cuarenta y uno a mil cuarenta y dos), los dos últimos dependientes también del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; porque al rendir el informe justificado que les fue solicitado, dichas autoridades **niegan** los actos que a cada una de ellas se les atribuye; consistentes tales actos en la abstención de declarar la exención del pago del **Impuesto Predial** de la cuenta catastral predio ubicado en l

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN LOCAL
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
RELATIVA A LA CIUDAD DE MÉXICO

en esta Ciudad de México, Distrito Federal, por todo el período en que ha permanecido incorporado a los Bienes del Dominio Publico del Distrito Federal, con motivo de la expropiación a la que estuvo sujeto; y los requerimientos hechos para obtener el pago del citado Impuesto.



P-1321/2007

1154

Sin que se óbice para llegar a la conclusión antes precisada, el hecho de que a fojas trescientas once a trescientas veintidós de autos, obre copia del Citatorio de diez junio de dos mil cinco, copia de la Consulta de Adeudos Predial por cuenta por Cuenta y Reposición de recibos Predial / por Determinación del Impuesto Predial actualizado, recargos, condonación de recargos y total a pagar, porque el Citatorio esta dirigido "AL PROPIETARIO O POSEDOR DEL PREDIO

en tanto que la Consulta de Adeudos y la determinación del Impuesto Predial citados, también se dirigen al indicado propietario o poseedor, el cual es distinto al que describe la peticionaria de garantías, como el de su propiedad, localizado en

Código Postal

en esta Ciudad de México, Distrito Federal.

Consecuentemente, al no ser ciertos los actos reclamados a las autoridades ordenadoras antes mencionadas, no resultan ciertos los atribuidos al ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOCAL PARQUE LIRA, ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, consistentes en los requerimientos de pago hechos a la quejosa del Impuesto Predial relativo a la cuenta 035-281-20-000-2, respecto del predio antes señalado, por el período que menciona la quejosa, puesto que como ya se dijo, esos requerimientos se encuentran dirigidos a la propietaria o poseedora de un inmueble distinto al que se defiende en la demanda de amparo.

Aplican al caso, la tesis aislada número 324,667, visible en la página 5888, del Semanario Judicial de la Federación,

tomo LXXVII, Materia Administrativa, Quinta Época, Segunda Sala, que textualmente dice:

"INFORME JUSTIFICADO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, OMISION DEL.

Si el presidente del comité de vigilancia del comisariado ejidal responsable no rindió su informe justificado, es claro que existe la presunción de certeza consignada en el artículo 149 de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos que se le atribuyen, pero esa presunción cede ante la negativa de las otras autoridades y de modo principal ante la de la autoridad señalada como ordenadora, pues en esas condiciones, siendo inexistente la orden reclamada, resulta imposible que pudiera ser realizada por una autoridad ejecutora, como es el citado presidente, que no rindió su informe".

Y tesis aislada 324,622, visible en la página 5460, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, Materias Común, Quinta Época, Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente:

"ACTOS RECLAMADOS, EJECUCION DE LOS. *Si se atribuye a una autoridad la calidad de ejecutora, pero no se comprueba la expedición de la orden que debía ejecutarse, no puede haber acto para su cumplimentación".*

Luego, como la impetrante de garantías no aportó prueba alguna, con la que se desvirtúe la negativa de actos de las autoridades antes mencionadas; entonces, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías por lo que toca a los reclamados a la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, SALA SUPERIOR DEL REFERIDO TRIBUNAL, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1155

P-1321/2007

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECTORA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, dependientes, ambos de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, SUBDIRECTOR DE TRÁMITES INMOBILIARIOS, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVERSIONES Y PAGO DE INDEMINIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR FISCAL DE LA CIUDAD ENTIDAD, TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SUBTESORERO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO LOCAL EN PARQUE LIRA, los dos últimos dependientes también DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL y, ACTUARIO Y EJECUTOR ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOCAL PARQUE LIRA, ASIGNADO A LA SECCION VIRREYES DE LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC.



CUARTO DE
FIA ADMINISTRACIÓN
DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA
FEDERAL

En apoyo de lo anterior, cabe citar la tesis de jurisprudencia número P.VI.2o.J/20, correspondiente a la Octava Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos veintisiete, del tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo".

Así como, la jurisprudencia número 53, visible en la página noventa, de la Segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que textualmente dice:

"ACTO RECLAMADO. NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna, debe sobreseerse en el amparo respectivo."

CUARTO.- Deben considerarse ciertos los actos reclamados al DIRECTOR GENERAL JURÍDICO, Y DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, consistentes en el incumplimiento de la sentencia pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, en los autos del juicio de nulidad número III-11077/2000, al resolver el recurso de apelación 2405/2002 y su acumulado 3586/2002; pues aún cuando la referida autoridad al rendir su informe justificado en oficio que obra a fojas seiscientos siete a seiscientos venticinco de autos, **niega la existencia** de los mismos, tal negativa no debe admitirse, en virtud de que en autos no existe constancia alguna con la que se demuestre que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

P-1321/2007

1156

hubiere dado cumplimiento a la sentencia de mérito y a la resolución de queja de fecha **veinticinco de octubre de dos mil cinco**, mediante la emisión de la nueva resolución que se le ordeno dictar en la sentencia en comento.

Del mismo modo, no obstante que el DIRECTOR DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS RECURSOS NATURALES ÁREA PERTENECIENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL (nombre correcto de la autoridad designada como Director de Conservación y Recursos Naturales de la Comisión Natural de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal), al rendir su informe justificado en oficios que obran a fojas quinientas treinta y seis a quinientas cuarenta y uno, **niega** los actos que se le atribuyen, consistentes en la emisión del oficio

de doce de diciembre de dos mil cinco, en el cual proporciona información a la DIRECTORA GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS respecto del inmueble a que se refiere la quejosa en su demanda de amparo.

DISTRITO
TRABAJO
MEXICO

Esa negativa no debe admitirse, por encontrarse desvirtuada con la copia certificada del repetido oficio SMA/DG CORENADER/DECRRANDSANP/530/2005 de doce de diciembre de dos mil cinco, que obra a fojas quinientas dieciocho a quinientas diecinueve de estos mismos autos.

QUINTO.- Previamente al estudio de fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las que hagan valer las partes, o de oficio, por ser ésta una

119

cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como la tesis de jurisprudencia número 814, visible en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que al respecto señala:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

A tal propósito, los CC. JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y TRAMITES INMOBILIARIOS, SUBDIRECTOR DE TRAMITES INMOBILIARIOS, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVERSIONES Y PAGO DE INDEMINIZACIÓN, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, dependientes todos DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, hacen valer las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V, XV y XVIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 116, fracción V del mismo cuerpo de normas.

Lo anterior, por estimar que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la empresa quejosa, toda vez que no acredita ser titular del inmueble a que se refiere en su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1157

P-1321/2007

demanda de amparo; que antes de ocurrir al juicio de amparo, debió agotar recurso de queja previsto en el 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; y porque la peticionaria de garantías no expresa los conceptos de violación que le causan los actos reclamados.

Es fundada en parte, e infundada en otra la primera causa de improcedencia que se hace valer.

En efecto, el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé:

Art. 73.- El juicio de amparo es improcedente:-

(...)

V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.

El ordenamiento transcrito establece la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Así, se precisa que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número VI. 2o. J/87, visible en la pagina trescientos sesenta y cuatro, del Tomo VI Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca bajo el rubro: **"INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE."**

Por su parte, el artículo 4° de la misma ley dispone:

"Artículo 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto que reclama; definiendo como perjuicio, para efectos del juicio de garantías, la afectación a los derechos o intereses de una persona, derivada de la actuación de una autoridad, lo cual constituye el interés jurídico para instar la protección federal.

El interés jurídico para promover el juicio constitucional deviene de la titularidad que el quejoso tenga en relación con los derechos que aduce infringidos.

Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente:

a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad;

b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular;

c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-55

P-1321/2007

1158

colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla.

En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa.

En la especie, es fundada la causa de improcedencia propuesta únicamente por lo que toca al acto que se atribuye al DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE RECURSOS NATURALES, AREA PERTENECIENTE A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, consistente en la emisión del oficio

de doce de

diciembre de dos mil cinco (fojas quinientas dieciocho a quinientas diecinueve de autos), en el cual proporciona información a la DIRECTORA GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, respecto del inmueble que defiende la quejosa en su demanda de amparo.

Ello en atención a que el referido oficio no se encuentra dirigido a la impetrante de garantías, ni se le requiere en el alguna información, puesto que se trata de una comunicación interna entre autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Consecuentemente resulta claro que dicho acto no afecta el interés jurídico de la citada quejosa, por lo que debe sobreseerse en este juicio respecto del mismo.

SEXTO.- En relación con los diversos actos reclamados que resultaron ciertos, consistentes en el incumplimiento de la

sentencia de **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, dictada en el juicio de nulidad número III-11077/2000, al resolver la apelación número 240572002 y su acumulado 3586/2002 y de la resolución pronunciada con fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, en la queja planteada por la actora, atribuidos al DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDEAL, demandado en dicha queja, **resulta infundada** la causa de improcedencia que se analiza, en virtud de que de autos se advierte que la promovente de amparo es parte en el juicio de nulidad del cual deviene el acto reclamado, con lo cual acredita su interés jurídico para promover la presente instancia constitucional, en contra de dichos actos.

Consecuentemente, es infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción **V** de la Ley de Amparo, respecto de los actos ciertos antes señalados.

En apoyo de la conclusión anterior, cabe citar jurisprudencia I.2o.A. J/36, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Epoca, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 68, Agosto de mil novecientos noventa y tres, Página siete, que dice:

"INTERES JURIDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas."

Y la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Epoca, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de mil

P-1321/2007¹¹⁵⁹

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

novecientos noventa y cuatro, Página trescientos ochenta y nueve:

"INTERES JURIDICO. NATURALEZA DEL. El interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando la reparación de dicha transgresión, por lo tanto tal interés jurídico debe entenderse como aquél que tienen las partes con relación a los derechos o a las cosas materia del juicio en el que intervienen; es decir, la facultad que le asiste para solicitar que el procedimiento del que forman parte, se siga en términos de ley y por ello si aquél que tiene el carácter de codemandado en un juicio ejecutivo mercantil en el que se ha ejecutado el embargo de un bien que no pertenece al codemandado y éste demanda la tutela jurídica de la justicia federal por estimar que en el procedimiento de remate y adjudicación de tal inmueble, se cometieron a su juicio diversas violaciones, de carácter procedimental, es indiscutible que ese interés jurídico no deviene de demostrar ni la posesión ni la copropiedad o titularidad del bien inmueble, sino del carácter de parte que tiene en el juicio ejecutivo mercantil y el derecho que le asiste para que en todo ese procedimiento se observen los lineamientos procedimentales que la ley precisa."

DE DISTRITO Es igualmente infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales que aducen las responsables.

Ciertamente, el citado numeral prevé:

"Art. 73. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o

medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación;"

El precepto legal reproducido, establece la improcedencia del juicio de garantías cuando las leyes ordinarias por las que se rige el acto reclamado, prevea algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el mismo; siempre y cuando conforme a la ley que rige dicho medio de defensa, proceda la suspensión de los propios actos, sin exigir mayores requisitos que los que para el otorgamiento de la medida cautelar exige la ley de Amparo.

Es aplicable al caso, la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

1160

P-1321/2007

personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.

Ahora bien, resulta infundada la causa de improcedencia de que se trata, porque con las constancias que obran a fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y dos, ciento noventa y siete a doscientas de estos autos y, doscientas veinticuatro a doscientas sesenta y siete de los autos del cuaderno de pruebas uno de uno, se demuestra que la peticionaria de garantías antes de ocurrir a esta instancia constitucional, promovió el recurso de queja establecido en el artículo 83, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal.

En este contexto, resulta claro que no se actualiza la causa de improcedencia analizada.

Por último, resulta infundada la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de

Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, del citado ordenamiento legal que se hace valer, atento a las siguientes consideraciones:

Ciertamente, los numerales en comento en su respectivo orden prevén:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
(...)

XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán:
(...)

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1° de esta ley."

La hipótesis normativa transcrita, establecida en el artículo 73, fracción XVIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que el juicio de amparo es improcedencia del juicio constitucional, cuando se omita expresar en la demanda de amparo, conceptos de violación en contra de los actos que se reclaman.

Sin embargo, de la lectura de los conceptos de violación segundo y tercero hechos valer en el escrito inicial de demanda, se aprecia en forma indubitable, la existencia de argumentaciones tendientes a demostrar que los actos que se reclaman, son violatorios de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual es indicativo de que se reúnen los requisitos mínimos de la técnica jurídica del juicio de garantías para considerarse que en la especie, se expresa claramente la causa de pedir y por ende, existen conceptos de violación que en su momento se determinará si son suficientes o no para demostrar la inconstitucionalidad que reclama la quejosa.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1161

P-1321/2007

A lo anterior, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 2ª./J.63/98, visible en el Tomo VIII, del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquellas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que



RTO DE
RIA ADMINISTR
ITO FEDERAL

DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO

originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

SÉPTIMO.- Al no existir más planteamientos de improcedencia hechos valer por las partes, y en tanto que este Juzgado de Distrito no advierte alguna que deba examinarse de oficio, se procede al estudio de la litis planteada, a la luz de los conceptos de violación aducidos en contra de los actos reclamados que resultaron ciertos, consistentes en el incumplimiento de la sentencia de **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, dictada en el juicio de nulidad número III-11077/2000 y de la resolución pronunciada con fecha **veinticinco de octubre de dos mil cinco**, en la queja planteada por la actora.

Sin que sea necesaria la transcripción de los citados conceptos de violación, atento al criterio sustentado en la jurisprudencia VI.2o.J./129, visible en la página quinientos noventa y nueve, del Tomo VII del mes de Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

P-1321/2007¹¹⁶²

En los conceptos de violación segundo y tercero la parte quejosa aduce en esencia, que el incumplimiento en el que ha incurrido la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al resolver los recursos de apelación acumulados números 2405/2002 y 5386/2002, así como la resolución de queja de fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, dictada por la Tercera Sala del Tribunal de referencia, en el juicio de nulidad numero III-11077/2000, han causado efectividad y se le ha requerido a la autoridad demandada que cumpla, pero aquélla ha retardado de manera ilegal y arbitraria dicho cumplimiento.

Resulta fundado el concepto de violación ante sintetizado a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales, tal como se demuestra a continuación.

Efectivamente, los preceptos constitucionales que contienen las garantías que la parte quejosa estima violadas, son del tenor literal siguiente:

"Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...)"

"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)"

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía de seguridad jurídica, dentro de la que se encuentran inmersas la garantía de audiencia, la de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que el punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades esenciales del procedimiento, tal como se desprende de la jurisprudencia número 47/95 del Tribunal Pleno, publicada en el tomo II, diciembre, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, foja cincuenta y nueve que expresa:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las

P-1321/2007

1163



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Por su parte, el artículo 16 constitucional consagra en favor del gobernado, la garantía de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de (las) acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.



CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO FEDERAL

Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Seminario Judicial de la Federación, de la Octava Época, visible en el tomo XI, del mes de enero de mil novecientos noventa y tres, localizable en la página doscientos sesenta y tres, que establece:

"GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE

POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por

medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad."

De tal modo, que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por lo segundo, que también deben señalarse claramente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco Séptima Epoca, Tomo VI, parte SCJN, Tesis doscientos sesenta y cinco, página ciento setenta y cinco, que es del tenor literal siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Ahora bien, con el objeto de atender el problema planteado es indispensable traer a colación los hechos cuya existencia se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

P-1321/2007¹¹⁶⁴

advierte de las copias certificadas del expediente relativo al juicio de nulidad número **III-11077/2000**, que obran glosadas de la foja uno a trescientas diez del cuaderno de pruebas enumerado como uno de uno y, ciento cuarenta y cuatro a ciento sesenta y nueve, ciento noventa y siete a doscientas, doscientas treinta y cuatro a doscientas ochenta, doscientas ochenta y cuatro a trescientas veinticinco, trescientas veintisiete a trescientas cuarenta y cuatro, trescientas cuarenta y ocho a trescientas cuarenta y nueve, trescientas noventa y ocho a cuatrocientas ocho, cuatrocientas trece a cuatrocientas veintinueve, cuatrocientas cuarenta y cinco a cuatrocientas cincuenta y uno, cuatrocientas sesenta y siete a cuatrocientas sesenta y nueve, quinientas dieciocho a quinientas veintiocho, seiscientos veintisiete a novecientos cuarenta y dos de estos autos, a las cuales este órgano judicial les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; a saber:

1.- Mediante Decreto publicado el **diez de Junio de mil novecientos noventa y dos**, se declaró de utilidad pública el establecimiento de la zona prioritaria de preservación y conservación de equilibrio ecológico y área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica la superficie de 85-67-41.20 hectáreas, como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento preservación y restauración de sus condiciones ambientales, constituida por cinco polígonos ubicadas en la Delegación Miguel Hidalgo; y se **expropio** a favor del entonces Departamento del Distrito Federal. Superficie la anterior, en la que en el polígono número E-1 quedo comprendido el predio que defiende la quejosa en su escrito de demanda, esto es, el ubicado en

Código Postal

de esta Ciudad de México Distrito Federal (fojas doscientas

veinticinco a doscientas cuarenta y uno, ochocientas veintidós a ochocientas treinta, ochocientas cincuenta y uno a ochocientas cincuenta y siete de autos y, ochocientas ochenta y dos a ochocientas noventa y ocho del tomo de pruebas 3).

2.- En escrito presentado el **tres de junio de mil novecientos noventa y nueve**, en representación de S. A., solicitó la **reversión** del predio antes descrito y del que se localiza en

, de esta Ciudad de México Distrito Federal, con superficie de 4,800. 00 metros cuadrados el primero y 2,000. 00 metros cuadrados el segundo, respectivamente (fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta de los presentes autos, veintinueve, setenta y nueve y, ochenta y dos de los autos del tomo de pruebas 1-1).

3.- Con la demanda antes mencionada, se formó el expediente administrativo número **R/39/99**, tramitado ante la DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, la cual que con fecha **cinco de septiembre de dos mil**, pronunció resolución que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO.- Es improcedente la reversión de los inmuebles especificados en el punto número dos romano del presente dictamen conforme a los razonamientos y fundamentos vertidos en antecedentes y considerandos de esta resolución" (fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta de autos).

4.- Mediante escrito presentado el **veintitrés de octubre de dos mil**, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, José Berumen Carrillo, con el carácter de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

P-1321/2007¹¹⁶⁵

representante legal de S. A., **demando la nulidad** de la resolución señalada en el párrafo anterior.

5.- De la indicada demanda correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal antes mencionado, la que lo registro con el número III-11077/2000 y con fecha **quince de febrero de dos mil dos**, pronunció sentencia en la que **declaró la nulidad** de la resolución impugnada, por estimar por una parte, que la indicada resolución no contiene fundamento alguno y por la otra que dicha resolución no está debidamente fundada y motivada (foja ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y dos de autos y, uno a dieciocho de cuaderno de pruebas 1 de 1).

6.- Inconformes con la sentencia de mérito, tanto la Sociedad Anónima (fojas trescientas noventa y ocho a cuatrocientas ocho), como el Director de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal demandado (fojas cuatrocientas trece a cuatrocientas diecisiete de autos), interpusieron **recursos de apelación** en su contra, los que fueron admitidos y registrados con los números 2405/2002 y 5386/2002, respectivamente.

Posteriormente, por resolución de nueve de julio de dos mil dos, se acumuló al recurso de apelación primeramente citado el diverso número 3586/2002 y con fecha **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dictó sentencia en dicho recurso de **apelación (2405/2002 y su acumulado)**, en la que **revocó** el fallo combatido por considerarlo incongruente, **reconociendo así la validez** de la resolución impugnada en el juicio de nulidad número III-11077/2000, por lo que se refiere al predio **ubicado en**

de la Ciudad de México; y
declarando la nulidad de dicha resolución respecto del diverso
localizado en

, Código Postal
de esta misma Ciudad, por las razones señaladas en el
considerando XI, de la sentencia en comento. Considerando en el
que textualmente se expresa:

"XI. En los puntos marcados con los números 3, 4 y 5 del capítulo de hechos de la demanda, los que se estudian en conjunto por estar relacionados entre sí, señala la actora que la resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad se limitó a determinar que no procedía la reversión solicitada, señalando de manera genérica una serie de acciones realizadas en el bosque de Chapultepec, y omitiendo precisar qué acciones concretas están llevando a cabo, respecto del predio ubicado en Montes Apalaches número 525, por lo que señala que la autoridad no prueba que el predio expropiado ha sido destinado para los fines establecidos en el artículo 2 del decreto expropiatorio que dieron causa a la declaración de expropiación.

Lo anterior resulta fundado, ya que del análisis de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil que obra a fojas veintinueve a treinta y cinco del expediente en que se actúa se observa que en ella la autoridad se limita a señalar lo informado por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en el oficio número de fecha siete de julio de dos mil, en el que se indica que la administración del área donde se encuentra el predio cuya reversión pretende el actor corresponde a la Delegación Política en Miguel Hidalgo, por estar ubicado en suelo urbano, y que desde la declaratoria respectiva dicha Delegación se ha hecho cargo de su vigilancia, administración, reforestación, manejo y uso público, por lo que la Subdelegación Bosque de Chapultepec, perteneciente a la Delegación Miguel Hidalgo le informó a la Dirección General que emitió el oficio de fecha siete de julio de dos mil, está realizando



P-1321/2007

1166



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

un programa de Recuperación Integral Chapultepec, nuestro Bosque, y luego enumera una serie de acciones que está llevando a cabo la citada subdelegación, pero no prueba por qué medios y en qué fecha las autoridades que menciona de la Subdelegación Hidalgo, informaron a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural acciones que dicen estar realizando a través del programa que cita y tampoco demuestra que efectivamente se estén llevando a cabo dichas acciones, por lo que no se demuestra que se está dando cumplimiento a los fines del decreto expropiatorio, también en la resolución impugnada se hace referencia al oficio de

veintiseis de abril de dos mil emitido por la Dirección General de Administración Urbana en el que se indica que en sus archivos se localizó el decreto presidencial de ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez del mismo mes y año, en el anexo uno por el que se expropió una superficie de 85-67-41-20 hectáreas de terrenos correspondientes a la "Tercera sección de Chapultepec y depresiones aledañas en la Delegación Miguel Hidalgo", declarándose área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, quedando incluido totalmente, entre otros predios, el reclamado por la representación de

sociedad anónima, señalando que se realizó una visita al predio señalado y que éste no ha sido alterado en su aspecto ecológico, ya que es un área densamente poblada de árboles, por lo que considera que si se cumple la causa de utilidad pública

para la que fue expropiada, sin embargo, lo antes expresado es una afirmación genérica con la que bajo ningún concepto se demuestra que en el predio expropiado se cumpla la causa de utilidad pública por la que fue expropiado.

Sin embargo, en el considerando cuarto, la autoridad señala que no es procedente la reversión solicitada, ya que de los informes de las autoridades encargadas de ejecutar el decreto mencionado, se concluye que el inmueble expropiado en su totalidad ha sido destinado a la causa de utilidad pública a través de las acciones señaladas en el antecedente V, inciso A) y B) señalando que en el caso concreto no se configura la hipótesis contenida en el artículo 9 de la Ley de Expropiación para solicitar la Reversión, esto es que al

haberse destinado el inmueble afectado por la expropiación al fin que motivó la causa de utilidad pública no procede la reversión de dicho acto de autoridad.

No obstante lo anterior, la autoridad no señala cómo es que llegó a esta conclusión y tampoco cuáles son las acciones concretas que realizó en el predio a debate y por las cuales considera que se ha cumplido con la finalidad para la que se expropió ya que del informe rendido por el Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural contenido en el oficio número de fecha siete de julio de dos mil, no se desprende dicha situación por las razones antes indicadas, lo que también sucede con el informe rendido por la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, ya que se insiste dichos informes no se encuentran sustentados con prueba idónea que justifique su veracidad.

Señala el actor en el número seis del capítulo de hechos, que respecto de dichos informes que con éstos no se precisa, funda y motiva la resolución impugnada, ya que en ellos no se señala cómo se determinó que se dio cabal cumplimiento a la causa de utilidad pública invocada en el decreto de expropiación, y cómo determina que se realizó dentro del lapso que establece el artículo 9 de la Ley de Expropiación.

Lo anterior resulta fundado ya que de la lectura que se haga de la resolución impugnada no se desprende en qué se basó la autoridad para señalar que se había dado cabal cumplimiento al fin señalado en el decreto de expropiación, ya que si bien se señala la existencia de diversos informes, los que no se encuentran sustentados en prueba idónea alguna, para justificar la veracidad de los mismos, como ya se demostró y si bien también se indica una visita al inmueble de referencia, no se citan las circunstancias en que ésta se realizó y tampoco se precisa si al ser una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y área natural protegida, cómo es que se realiza dicha protección, ya que únicamente se señala en dichos informes que se considera que se cumplió con el objetivo para la cual fue expropiado dicho

JULIO 2007
DISTRITO FEDERAL
EN EL D.F.



CUARTO DE
MATERIA ADMIN
EN LA CIUDAD DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

P-1321/2007

1167

predio, porque está completamente arbolado y libre de construcción, sin embargo, del desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por el actor se demuestra lo contrario, ya que en esta se señala que el predio señalado con el número

se encuentra en total abandono, con mucha basura y escombros de material de construcciones poblado de árboles y maleza, con troncos secos, cercado con malla ciclónica y que se encuentra en una zona totalmente urbanizada, con banquetas pavimentadas alrededor del predio, además de servicio de luz eléctrica y líneas telefónicas.

Además de que en el acta número 15903 levantada por el notario público número ciento cuarenta y cuatro del Distrito Federal, que obra a fojas treinta y seis a cuarenta y siete de autos del juicio principal se encuentra la fe de hechos respecto del estado en el que se encuentra el predio ubicado en

y se hace constar que está en condiciones y que es terreno baldío, por lo anterior procede declarar la nulidad de la resolución impugnada de acuerdo al artículo 81, fracción II de la Ley que rige a este Tribunal quedando obligada la autoridad demandada a restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de que quede firme el presente fallo, dictando una nueva resolución siguiendo los lineamientos de este fallo.

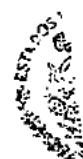
(fojas ciento cincuenta y tres a ciento sesenta y tres de

DISTRITO FEDERAL
AUTOS)

7.- En escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia señalada en el párrafo que precede; recurso del que toco conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que lo registro con el número **RCA 84/2004** y por resolución de cinco de julio del

año en cita, lo **desecho** (fojas cuatrocientas cuarenta y cinco a cuatrocientas cincuenta y cuatrocientas sesenta y siete a cuatrocientas sesenta y nueve de autos).

8.- Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil **cinco**, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en representación de S. A., interpuso **recurso de queja** en contra del Director General Jurídico y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, por falta de cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con fecha **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, en la apelación número **240572002** y su acumulado 3586/2002; recurso que fue tramitado por la Tercera Sala del aludido Tribunal, en los autos del juicio de nulidad número III-11077/2000, en el que con fecha **veinticuatro de mayo del propio año dos mil cinco**, se dictó resolución en la que se declaró procedente y **fundada** la referida queja (fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y dos y, ciento noventa y siete a doscientas de autos).



RECORRIDO
ESTRITO EN MATERIA
EN EL DISTRITO



9.- Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil cinco, en la Oficina de Correspondencia Común en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal

ARTO
ADM
YAD

por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado la resolución antes mencionada (foja ciento setenta a ciento setenta y cuatro del cuaderno de pruebas uno de uno).

De la indicada demanda toco conocer al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que la admitió con el número de registro **878//2005** y seguido que fue el procedimiento legal correspondiente con fecha **veintiséis de**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

P-1321/2007 ¹¹⁶⁸

agosto de dos mil cinco, pronunció sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y se dictara otra debidamente fundada y motivada. Sentencia esta que fue declarada ejecutoriada en auto de veinticinco de octubre siguiente (fojas doscientas quince a doscientas dieciocho y, doscientas veintiuno de los autos del cuaderno de pruebas uno de uno).

10. En cumplimiento de la sentencia señalada con antelación, (la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el veinticinco de octubre de dos mil cinco, pronunció nueva resolución, en la que estimó fundada la queja interpuesta por la peticionaria de garantías, con motivo del incumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del aludido Tribunal con fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro; y, requirió a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, para que cumpliera en su términos con la sentencia de mérito, para lo cual le concedió cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicha resolución (fojas doscientas veinticuatro a doscientas veintiocho de los autos del cuaderno de pruebas uno a uno).

11. Finalmente, en acuerdo de siete de abril de dos mil seis, la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, determino tener por no cumplida la sentencia pronunciada por la Sala Superior del referido Tribunal con fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro; y, concedió cinco días a la autoridad demandada para que acreditara haber cumplido con la resolución de queja de

veinticinco de octubre de dos mil cinco (foja doscientas sesenta y siete del cuaderno de pruebas uno a uno).

Bajo este contexto y como se anticipó, resultan fundados los conceptos de violación segundo y tercero aducidos por la quejosa porque, de las constancias que obran glosadas en los autos relativos a esta instancia constitucional y en los cuadernos de pruebas relativos al mismo, no se advierte que la DIRECCION GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, haya cumplido la sentencia de nulidad de **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni se advierte que haya acatado la resolución de queja de fecha **veinticinco de octubre de dos mil cinco**.

Consecuentemente, no puede negarse que cuando existe tal desobediencia o se deja de cumplir el fallo de un tribunal se incurre en violación de garantías, puesto que se priva al gobernado del derecho que surge de una sentencia firme pronunciada por una autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley; por ende, el incumplimiento por parte de la autoridad responsable a los fallos precisados en el párrafo que antecede, infringe las garantías de legalidad y seguridad jurídica que se encuentran contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta aplicable al caso, por analogía y en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, correspondiente a la Sexta Epoca, visible en la página sesenta y siete, del Tomo: Tercera Parte,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

1169

P-1321/2007

XLVII, del Semanario Judicial de la Federación, la cual ilustra lo siguiente:

"TRIBUNAL FISCAL, EL AMPARO ES PROCEDENTE PARA EL EFECTO DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS. La exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal establece que la resistencia de los funcionarios de Hacienda a cumplir lo dispuesto en las resoluciones del tribunal de la materia, debe combatirse mediante el juicio de amparo y tal principio es admisible como criterio para la interpretación y aplicación del Código Fiscal, dado que éste reproduce, en la parte relativa a la organización, la competencia y el funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, el articulado correspondiente de la Ley de Justicia Fiscal, las sentencias del Tribunal Fiscal son, en términos generales, de carácter declarativo, en consecuencia, no motivan por sí mismas, en forma inmediata, la ejecución forzosa. Justamente por ello, y atendiendo a que dicho órgano de justicia administrativa carece de la facultad de imperio pues no puede emplear medios coercitivos para proveer al cumplimiento de sus fallos, resulta indispensable que ante otro tribunal se desenvuelva el proceso cuya culminación sea convertir una sentencia meramente declarativa, en un mandamiento idóneo, por sí mismo, para motivar de modo directo la ejecución. Si las resoluciones de aquel tribunal son definitivas y poseen la fuerza de la cosa juzgada, y si, por tanto, crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual obligación es correlativa del derecho de un particular, no puede negarse que cuando se desobedece, o se deja de cumplir, el fallo de la Sala Fiscal, se incurre en una violación de garantías, puesto que se priva a un individuo del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley, y sin que la negativa, la omisión o la resistencia estén, de ninguna manera, legalmente fundadas y motivadas. Cabe quizás objetar que el juicio de amparo tiene por única finalidad proteger las garantías individuales, y que no debe convertirse en un recurso de queja, ni un incidente de inejecución de sentencia. Puede admitirse que el juicio constitucional, en la mente de sus creadores, no se ideó como medio de cumplimentar sentencias, ni se pensó que pudiera servir para ese efecto, como una finalidad propia. No obstante ello, ha de reconocerse que, además de carecer el Tribunal Fiscal, como ya se dijo, de facultades ejecutivas, y aparte de que el código de la materia no prevé

ningún procedimiento que permita la ejecución de las sentencias de dicho tribunal, o que se enderece expresamente a obtener el cumplimiento de lo resuelto en las mismas, se comete una violación de garantías individuales siempre que la autoridad administrativa, obligada a acatar lo decidido por el órgano contencioso, se resiste a cumplir su deber, o simplemente se abstiene de realizar los actos necesarios para obedecer, de modo íntegro y eficaz, el fallo del tribunal. Es claro, por ende, que el incumplimiento de la sentencia que pronunció el tribunal contencioso-administrativo da lugar a la interposición del juicio de amparo, ya que tal incumplimiento importa la infracción de los artículos 14 y 16 de la Carta Federal, y el mismo no puede impugnarse por medio de ningún recurso o procedimiento que de modo expreso prevea el Código Fiscal."

En las relacionadas condiciones, resultan fundados los conceptos de violación segundo y tercero antes examinados y por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa para el efecto de que el DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, inmediatamente cumpla la sentencia de nulidad de **treinta y uno de marzo de dos mil cuatro**, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se ordena a esta autoridad "**restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de que quede firme el presente fallo, dictando una nueva resolución siguiendo los lineamientos de este fallo**", así como la resolución de queja de fecha **veinticinco de octubre de dos mil cinco**.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, 75, 77, 78, 79, 155 y 192, de la Ley de Amparo, se **resuelve**:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-55

1170

P-1321/2007

PRIMERO.- Se **SOBRESEE** en el presente juicio de amparo número **1306/2007**, promovido por **SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** A **SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de los actos reclamados al **DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **MARÍA GUADALUPE RIVERA GONZÁLEZ**, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, asistida por la Secretaria que autoriza y da fe, Licenciada Atzimba Martínez Nolasco, hasta el día de hoy **treinta y uno de enero de dos mil ocho**, fecha en que se terminó de engrosar la presente sentencia. **Doy Fe.**

ACORDADO

En la misma fecha se giraron los oficios **419-R** a **442-R** a fin de notificar a las autoridades responsables la resolución definitiva que antecede.- **Conste.**

06 FEB 2008

Notado por lista a los
jueces y al C. Agente del Ministerio
Pública Federal, la resolución que antecede.- **Doy fe.**

EL ACTUARIO

133

1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451



UZGADO CU:
EN MATERIA
EL DISTRITO



JUZGADO CUAR
 EN MAR...
 ...

1942 年 10 月 1 日

1950-1951

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

Abstract